

Empresarios en el punto de mira

Desde que ETA recurrió al terror para intentar conseguir sus fines, ha necesitado dinero para adquirir en el mercado negro el armamento y la munición que no lograba robar de las armerías francesas o los explosivos que no podía fabricar artesanalmente. Y no sólo eso: la cúpula etarra también tenía que preocuparse de sufragar los gastos de los integrantes de los diferentes comandos de la banda e incluso de ayudar económicamente a las familias de los presos. Para obtener ingresos, ETA recurrió a su mejor arma: de nuevo, el terror.

La evolución de la banda en los modos y en las aspiraciones económicas ha sido constante: de los fajos de billetes enterrados en bidones en medio del monte e incluso en ocasiones mordisqueados por los ratones, como relata el periodista y experto **Florencio Domínguez Iribarren**, ETA pasó a mover el dinero a través de transferencias bancarias, lo invirtió con poco éxito en otras divisas e incluso blanqueó cantidades relevantes a través de un *holding* de empresas. Con el paso de los años sofisticó sus métodos para llenar sus arcas y evitar la acción policial: los atracos dejaron paso a los secuestros y estos al llamado *impuesto revolucionario*, un chantaje continuo, soterrado y capilar que ha acabado modelando la sociología de Navarra y del País Vasco durante varias décadas. El éxodo silencioso de muchas familias, la quiebra de algunas empresas y el miedo cotidiano de cientos de empresarios que habían recibido “la carta” han sido algunas de las consecuencias de las prácticas mafiosas de ETA.

Javier Taberna Jiménez, abogado de profesión y presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, explica que “el miedo es libre y el valor no es algo que se pueda exigir”, pero lo cierto es que en Navarra, salvo excepciones, directivos y empresarios han combatido de manera discreta, con la ayuda de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la lacra que ETA suponía para sus negocios. El chantaje no ha tenido la repercusión mediática de los secuestros, los atentados o los más de 800 asesinatos que ha dejado la banda terrorista en su historia; sólo ahora, después de que ETA anunciase en abril de 2011 que cesaba la extorsión, empiezan a conocerse las historias y vivencias de empresarios vascos y navarros que sobrellevaban el día a día intentando aparentar normalidad cuando, en realidad, vivían sumidos en la tensión e incertidumbre de qué ocurriría cuando arrancasen su vehículo, doblaran una esquina o simplemente, salieran de sus empresas entrada la noche. De una forma u otra, la amenaza de ETA siempre ha estado encima de la mesa de los empresarios navarros, especialmente en aquellos que trabajaban en compañías en las que estaban representados los sindicatos abertzales.

Durante décadas, la discreción fue la máxima de quienes recibían las misivas amenazantes. Denunciarlo suponía ponerse en el punto de mira de ETA ante el temor

de posibles filtraciones a los medios de comunicación. Callar equivalía a vivir con la incertidumbre y la sensación de sentirse vigilado. Y pagar, para la mayoría de los empresarios navarros, no fue una opción: “Pensé en contratar seguridad privada. Era algo que me lo podía permitir pero no lo hice. Hubiera sido como ponerme una etiqueta que dijera que estoy amenazado por ETA. Todo el mundo, al verme, se hubiera cambiado de acera, y si me tenían que matar, ellos iban a elegir dónde, cuándo y cómo”, confiesa un empresario. Un segundo añade: “Durante los primeros años noventa la figura del escolta estaba normalizada. Si paseabas por el Casco Antiguo de Pamplona sin seguridad, oías comentarios del tipo: ‘Si no lleva escolta, es porque ha pagado’”.

Ante esta encrucijada de caminos, los máximos responsables de la Confederación de Empresarios desempeñaron un papel crucial en la lucha contra el terror de ETA. Los cuerpos de seguridad del Estado no tienen ninguna duda de que sin la intervención de **Juan Antonio Ibiricu**, **José Manuel Ayesa** o **José Antonio Sarría** hubieran sido muchos más los empresarios que ante el temor de ser secuestrados o ser víctimas de un atentado habrían pagado.

En una época extraordinariamente convulsa debido a los conflictos sociales, políticos y económicos, Juan Antonio Ibiricu, responsable de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) en los primeros años ochenta, dio un paso al frente para denunciar a ETA y pedir que no se aceptaran sus peticiones económicas. Su discípulo, José Manuel Ayesa, asumió en 1989 la presidencia de la CEN con idéntico coraje y fuerzas cuando la actividad terrorista de ETA alcanzaba su máximo nivel. En una reunión secreta, se marcó un protocolo de actuación coordinado con especialistas de la Guardia Civil para que cualquier empresario extorsionado pudiera denunciar los hechos sin temor a que apareciera en los medios de comunicación o su entorno más cercano lo supiera. Cualquier profesional podía empezar a recibir cartas amenazantes: una guía de empresas, un listín telefónico, las *Páginas amarillas* o un simple cruce de datos del Registro Mercantil y del censo electoral servían a ETA para saber dónde mandarlas y a nombre de quién. A veces no sabían nada más. Tanto es así que en varias ocasiones recibieron la carta empresarios arruinados o particulares que residían en una vivienda que antes había pertenecido a un directivo.

Se calcula que más de 2.000 personas fueron chantajeadas en Navarra en la última época, cuando ETA automatizó el envío de cartas. Y se estima que sólo un cinco por ciento cedió a la extorsión, un porcentaje inferior a los de Bizkaia y Gipuzkoa, donde el efecto del *impuesto revolucionario* fue mucho más dañino para el tejido empresarial. ●